

II

INSERCIÓN

Solicitada por el señor senador Berhongaray

Disidencia parcial al dictamen de mayoría referente al proyecto de ley orgánica del ministerio público

1.—Artículo 5° (Designaciones) modificar el mismo por el siguiente texto:

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.

Fundamentación

Se trata de que la cámara que constituye expresión más directa de la voluntad popular intervenga también en la trascendente elección de los magistrados que constituirán cabeza del Ministerio Público. También al requerir el carácter público de las sesiones, se ha procurado uniformar el procedimiento con lo dispuesto en el

inciso 4 del artículo 99. para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de la Nación, asegurando la transparencia del acto.

Los jefes del Ministerio Público cuya trascendencia histórica está marcada por la Constitución Nacional, merecen un mecanismo transparente en sus nombramientos, y al equiparar las condiciones de los magistrados a los integrantes del Poder Judicial, de más está decir que si gozan de igual rango constitucional, estabilidad, inmunidad, salario, etcétera deben ser sometidos al mismo procedimiento para su designación.

2.— Se propone en el artículo 8° modificar el segundo párrafo de la siguiente manera:

“El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el Senado de la Nación reunido al efecto”. Los fiscales

y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación.

Fundamentación

Se aprecia que el texto del dictamen no favorece la imagen de independencia respecto de los demás poderes que debiera tener la institución, particularmente teniendo en cuenta las actuales críticas doctrinarias, y el carácter de órgano extrapoder — independiente — que le asigna actualmente la Constitución Nacional, creo conveniente que el juramento se exprese ante la Cámara de Senadores, al ser ésta quien presta el acuerdo para su nombramiento. Siguiendo los lineamientos planteados respecto a la figura del Ministerio Público es fundamental su relación con el Poder Legislativo pues es el órgano que más representatividad política tiene en nuestro sistema.

3.—Se propone modificar el art. 13 de la siguiente forma:

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación durarán cinco años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.

El resto de los integrantes del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad..." (el resto igual que el texto del dictamen).

Fundamentación

En lo relativo a la duración del mandato de los funcionarios más importantes del Ministerio Público, se considera conveniente determinar un plazo de mandato, pues facilitará al Poder Ejecutivo nacional proponer las políticas públicas que sean necesarias para cumplir cabalmente con sus objetivos, en virtud de ello emitir las instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos y hacer efectiva las defensas de las causas públicas, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres, etcétera, otorgando así la posibilidad, al nuevo presidente conjuntamente con el Congreso de evaluar la eficacia de la gestión realizada por tan importantes magistrados.

Asimismo, ayuda a coordinar el funcionamiento de los poderes del Estado, pues son ellos los responsables políticos del Instituto.

4.—Art. 14, se propone modificar el 5º párrafo del artículo del siguiente modo:

...las denuncias que los miembros del ministerio público formulen relativas a perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones, serán consideradas por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación según corresponda. En el supuesto de ser tales denuncias fundadas, deberán poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fueren necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones"...

Fundamentación

Se ha procurado clarificar la redacción del párrafo, facilitar cualquier tipo de denuncias en caso de perturbación, así como otorgar precisión al procedimiento esta-

blecido, preservando la estructura jerárquica del Ministerio Público.

5.—Se propone modificar el artículo 15 del dictamen de la siguiente forma:

Los integrantes del Ministerio Público, sólo con su expresa conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales o destinados temporalmente en funciones distintas de las previstas en su designación, cuando se verifique alguno de los supuestos prescritos en los artículos 32 inciso g) y 50 inciso d).

Fundamentación

El texto propuesto a más de simplificar y clarificar la redacción, tiene por propósito tornar también necesaria la conformidad de los integrantes del Ministerio Público, para los casos contemplados en los artículos 32 inciso g) y 50 inciso d).

Cabe resaltar que en el párrafo actual del dictamen existe una coma que separa dos ideas distintas, de tal manera que por vía del traslado temporal de un fiscal a otra fiscalía se podría enturbiar su función, obtener su apartamiento de una causa o bien premeditadamente asignarle una causa determinada.

6.—Insertar como primer párrafo del art. 18 el siguiente texto:

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán ser removidos por un voto de censura emitido por el Congreso de la Nación y requerirá a la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Podrán también ser removidos por las causales y mediante procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional... (el resto del articulado como está en el dictamen).

Fundamentación

Es sumamente importante que se establezcan mecanismos de remoción de los jefes supremos del Ministerio Público, pues puede suceder que sin llegar a configurarse las causales previstas para el juicio político, sea necesaria la remoción de quien sustenta la magistratura. Esta tarea le compete al Congreso por ser responsables políticamente ante nosotros —en virtud del artículo 21 inciso e) y 31—, debemos tener herramientas para poder ejercer nuestro derecho de veto en caso de desconfianza o insatisfacción en su obrar.

La remoción del defensor general de la Nación o procurador general de la Nación con un "voto de censura", deliberado en ambas cámaras con la exigencia de la mayoría absoluta en la votación, garantiza la transparencia en la decisión del Congreso de remover a alguno de ellos de su cargo. Nos asegura la confiabilidad que depositamos en la persona que ejerce la magistratura máxima del Ministerio Público.

Además otorga seguridad jurídica pues tienen la primordial función de proteger los intereses generales de la sociedad y velar por la legalidad de los actos. Pues bien, el contralor que debemos realizar es mayor, en razón de ser esta Cámara interviniente en su nombramiento y recaer sobre nosotros la responsabilidad de fiscalizar el accionar sus jefes.

7.—Se propone modificar el inciso a) del artículo 19 del dictamen, en la siguiente forma:

Tres vocales deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ex procuradores o defensores generales de la Nación y serán designados uno por la Cámara de Diputados de la Nación, otro por el Senado de la Nación, y el restante por elección de los jueces nacionales a través del procedimiento que determine la reglamentación.

Apoyamos la disidencia propuesta por el senador Lopez al párrafo 9º del mismo artículo, y coincidimos con su redacción.

Fundamentación

A través de la modificación se propone destacar la independencia del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obliga a respetar la independencia y autonomía que exige la Constitución, como bien se ha dicho es un órgano extrapoder, o si se quiere llamarlo de control, es más que necesaria la separación de cualquier tipo de interferencia del Poder Ejecutivo o Judicial. Se propone tal modificación, en virtud de ser las cámaras Alta y Baja la expresión más sublime de diversidad de opiniones y amplitud de debate, es la expresión popular por excelencia en nuestro sistema de gobierno.

Con respecto a la segunda observación, es fundamental la independencia de quienes sean designados como fiscales, los que actuarán ante el tribunal de enjuiciamiento en caso de desestimar alguna denuncia presentada ante el procurador o defensor, (quienes tienen la prerrogativa para efectuarla). El acusado podrá apelar ante el Tribunal de Enjuiciamiento a través del Recurso de Queja, y cabe preguntarse ¿el mismo procurador general de la Nación o defensor general de la Nación nombra/rá al fiscal ante el tribunal que deberá juzgarlo?. Debemos otorgar las garantías suficientes a quienes puedan ser eventualmente juzgados, respetando el principio de defensa, el debido proceso, que no sólo está dado por un procedimiento legalmente formal, sino además exige otras garantías, que son esencialmente la imparcialidad de los intervinientes.

8.—Modificar el art. 69 por el siguiente texto:

Los cargos actualmente vigentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes lo ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con estabilidad y demás derechos y garantía establecidos en la presente ley, con excepción del procurador general de la Nación y el defensor general de

la Nación, los que serán designados conforme lo previsto en el artículo 5º.

Fundamentación

Coincidimos en confirmar en el cargo a los actuales integrantes del Ministerio Público, pues la disponibilidad de todos sus miembros traería aparejadas incertidumbre, inestabilidad e inseguridad en la administración de justicia.

Ahora bien, un severo reparo planteamos respecto al artículo 69 en lo que respecta a la subsistencia en el cargo del procurador general y defensor general, al ser los jefes del Instituto.

En primer lugar, las cabezas del MP han adquirido luego de la reforma de 1994 rango constitucional, ello torna aconsejable que, quienes van a dirigir el organismo sean nombrados con intervención de los Poderes Políticos del Estado, tal como lo prescribe la presente ley. El resto de los magistrados son creación legal, no ya constitucional.

En segundo lugar, y tal vez el más importante, es la violación que estaríamos realizando a las disposiciones prescritas en una misma ley, ya que el artículo 5º exige para su designación la intervención del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Senadores con una mayoría especial.

¡Qué ejemplo damos al pueblo si sancionamos leyes que en su mismo articulado estamos violando! ¡Que precedente legislativo sentamos con tal actitud!, ahora bien cabe preguntarse: ¿esto abre las puertas para que de ahora en adelante se sancionen leyes que sean incompatibles en su misma articulación?

En tercer lugar, el Artículo 21 inciso e) obliga al procurador general de la Nación y defensor general de la Nación a presentar un informe anual al Congreso, a fin de ser éste quien controle sus funciones, ello lleva a que el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación sean responsables políticamente ante el Congreso, por lo tanto debemos asegurarnos en quién depositamos nuestra confianza, pues el Congreso será en última instancia quien juzgue su accionar.

En cuarto lugar, debemos recordar que quienes ocupan hoy los cargos de procurador y defensor fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo nacional, sin intervención del Senado. Violando el decreto-ley 1.285/58 que exigía su nombramiento "a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado".

9.—Modificar el artículo 71 y 72 suprimiendo el término "actuales".

Fundamentos

En concordancia con la modificación propuesta por el artículo 69, a fin de no prestar a confusión y para una mejor redacción es conveniente la supresión propuesta.